

## El modelo de la democracia social radical en Venezuela: innovaciones y limitaciones

STEVE ELLNER\*

pp. 107-133

El modelo de socialismo que ha surgido en Venezuela bajo la presidencia de Hugo Chávez se diferencia, en gran parte, de manera fundamental del marxismo ortodoxo y las experiencias socialistas del siglo XX por su énfasis en los objetivos sociales por encima de los económicos. Además, en contraste con las doctrinas izquierdistas asociadas con el socialismo del pasado, la democracia social radical practicada en Venezuela apela a los no privilegiados en general, pero ha dado prioridad a las necesidades de los no proletarios, quienes son los sectores menos favorecidos de la población, específicamente los trabajadores de la economía informal, los trabajadores en pequeñas empresas no sindicalizadas de la economía formal y la fuerza laboral rural. El gobierno de Chávez da una gran importancia a la incorporación de estos grupos excluidos y semiexcluidos en la vida política, económica y cultural de la nación y su participación en la toma de decisiones, en particular en el ámbito local.<sup>1</sup> En el presente trabajo se usa el término «democracia social radical» en referencia a la estrategia chavista de promover la incorporación a escala masiva, lo cual fortalece la legitimidad del Gobierno, cuyas credenciales democráticas han sido consistentemente cuestionadas por sus adversarios en el contexto de la aguda polarización política.

Una presunción básica aceptada por gran parte del movimiento chavista es que los sectores no incorporados, no privilegiados en Venezuela tienen un alto nivel de conciencia política, pero carecen de la experiencia, habilidades y disciplina organizativa para desempeñar un papel protagonista en el proceso de transformación radical. Dirigentes y activistas chavistas, por ejemplo, atribuyen el fracaso de un número importante de cooperativas y consejos comunales a la falta de preparación de sus miembros. En un intento por estimular el interés y el entusiasmo por los programas sociales, tales como cooperativas y consejos

Nota: Este texto es una versión ampliada y corregida del publicado en la revista *Journal of Latin American Studies*, tomo 43, n° 3, pp. 421-449, agosto de 2011.

\* Profesor-investigador de la Universidad de Oriente, Anzoátegui.

Correo-e: sellner74@gmail.com

El autor recibió un aporte financiero del Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente (UDO) que facilitó la realización de este trabajo. La traducción fue realizada por la profesora Giomar Salas, de la Universidad de Oriente -UDO.

<sup>1</sup> En la esfera socioeconómica, «grupos excluidos» refiere a los miembros de la economía informal, mientras que «semiexcluidos» remite a los trabajadores no sindicalizados, con bajos salarios, de pequeñas empresas de la economía formal.

comunales, el Gobierno los impulsó mediante la inyección de grandes sumas de dinero en las estructuras rudimentarias. La flexibilidad institucional, la libertad de acción y la falta de controles estrictos sobre las asignaciones masivas para estos programas están diseñadas para fomentar la participación de aquellas personas que han sido tradicionalmente apáticas y escépticas e imbuidas de un sentimiento de impotencia.

El marxismo ortodoxo enfrentó el problema del atraso y el rezago en las condiciones esenciales para la transformación socialista de manera diferente. Los comunistas soviéticos después de 1917 veían el principal reto de su revolución como la necesidad de impulsar la capacidad productiva industrial de la nación con el fin de aumentar el tamaño del proletariado, que se consideraba el agente principal del socialismo. Este imperativo llegó a ser aún más urgente en los años treinta, cuando la industrialización rápida fue la respuesta lógica a una invasión alemana inminente a la Unión Soviética. Además, Marx, Lenin, Trotsky y partidos comunistas ortodoxos en América Latina (a diferencia de pensadores marxistas heterodoxos como José Antonio Mariátegui) mantenían posiciones ambivalentes hacia el campesinado, que a menudo fue considerado un aliado no confiable debido a su carácter pequeñoburgués (Caballero, 1986:94-96; 103-105; Lenin, 1935:83). El enfoque hacia las condiciones objetivas, y específicamente la transformación estructural de la economía y la fuerza laboral, fue diseñado para aumentar el tamaño del proletario en los países en vía de desarrollo y reducir, si no completamente eliminar, el campesinado. La izquierda tradicional vio este proceso como esencial para poder lograr el socialismo en regiones como América Latina (y también para avanzar hacia el comunismo).

El gobierno de Chávez en Venezuela es diferente de los países socialistas del pasado en otros aspectos. El llamado de los chavistas a un camino gradual, democrático y pacífico hacia el socialismo es la antítesis del sistema de partido único que prevaleció en Europa Oriental, China y Cuba. Además, el modelo venezolano se basa en la tradición de la democracia radical que se remonta a la democracia de Jean-Jacques Rousseau con su defensa del mandato de las mayorías y la participación directa en la toma de decisiones. En este sentido, bajo la presidencia de Chávez se han realizado un número sin precedente de elecciones, que incluyen las del referéndum y las revocatorias como también las elecciones primarias. Al mismo tiempo, el Gobierno y el movimiento de Chávez han promovido la movilización masiva de los sectores no privilegiados y su participación en las organizaciones y programas sociales, de conformidad con la democracia social radical (García-Guadilla, 2007b:144-145).

La democracia radical inspirada por Rousseau y la democracia social radical a menudo conducen a la debilidad de las instituciones. El concepto del mandato de las mayorías, defendido por la democracia radical, descarta los mecanismos diseñados para garantizar los derechos de las minorías (de acuerdo con la democracia liberal) y por lo tanto puede terminar debilitando la estructura institucional de la nación. La democracia social radical, por

su parte, promueve la flexibilidad y evita instituciones todopoderosas y reglas institucionales rígidas, a fin de alentar la participación de quienes carecen de experiencia organizativa. En el presente trabajo se argumenta que los chavistas, en su empeño de promover la democracia social radical, han sacrificado, hasta cierto punto, la meta de fortalecer las instituciones.

En general este trabajo examina la forma como la democracia social radical se ha desempeñado en Venezuela. Específicamente, hace diferencias entre la democracia social radical, que establece como objetivo fundamental la incorporación de los sectores antes excluidos en diferentes frentes, y los gobiernos reformistas latinoamericanos que promueven programas de bienestar social con una fuerte dosis de paternalismo, destinados a aliviar las condiciones económicas apremiantes. Se sostiene que la democracia social radical en Venezuela es cualitativamente diferente de los enfoques reformistas y del Estado de bienestar, y que el juego de suma cero que la caracteriza no tiene equivalentes entre los gobiernos más moderados. Se examina también el debate dentro del movimiento chavista sobre asuntos tales como las condiciones subjetivas, el papel del Estado y el ritmo del cambio, todos los cuales tienen una incidencia directa sobre las estrategias que sustentan la democracia social radical. Las observaciones finales colocan la democracia social radical de Venezuela en un contexto más amplio e intentan demostrar que los desafíos políticos, las prioridades en conflicto y las formulaciones ideológicas inciden sobre la consolidación del modelo.

Este trabajo expone un punto de vista novedoso, al centrarse en lo original de la experiencia venezolana bajo Chávez en comparación con otros gobiernos izquierdistas en otras partes. La novedad del caso venezolano proviene de la combinación del compromiso de la democracia social radical de incorporar los grupos marginados en forma masiva, la polarización política y social extrema, y el anticapitalismo.

### **El surgimiento de la democracia social radical**

La radicalización del gobierno chavista en general, y la democracia social radical en particular, fue en parte una respuesta a las tácticas cada vez más intransigentes de la oposición, que culminaron en el golpe de Estado en abril de 2002 y la huelga general de dos meses en 2002-2003. Como resultado, el gobierno chavista fue más allá de la retórica de «la democracia participativa» mediante la implementación de programas sociales en favor de las clases populares que apoyaron activa y masivamente al chavismo durante ambas crisis. En el frente social el gobierno dio prioridad a programas novedosos en los barrios conocidos como «misiones» en las áreas de la salud (Misión Barrio Adentro), la educación (Misiones Ribas y Sucre) y la distribución de alimentos (MERCAL). En los años siguientes, el financiamiento del Gobierno estimuló la creación de alrededor de 60.000 cooperativas de trabajadores y (después de 2006) entre 20.000 y 40.000 consejos comunales que se concentraron en las comunidades desfavorecidas. Los consejos comunales diseñan y ejecutan

proyectos de obras públicas y ejercen presión para la contratación preferencial entre los residentes de la comunidad.

Antes de llegar al poder, Chávez comenzó a cuestionar la doctrina marxista del papel central de la clase obrera en el proceso revolucionario. Según Chávez, la predicción de Marx de que el lugar de trabajo iba a ser el centro de la lucha revolucionaria más importante no ha sido confirmada en la práctica. Añadió que la desaparición gradual de la clase media está reduciendo la sociedad a dos clases: «una minoría explotadora y una gran mayoría explotada» (Blanco Muñoz, 1998:392, 397). Los teóricos de izquierda que están vinculados al movimiento chavista han afirmado que en América Latina en el siglo XXI el bloque revolucionario abarca más que el proletariado, ya que incluye en términos iguales a los miembros de los sectores informales, y al mismo tiempo critican la tendencia conocida como «obrerismo» de privilegiar al proletariado, típico de la izquierda tradicional (Harnecker, 2007: párrafos 368-371).

Teniendo en cuenta esta visión más amplia, no es de extrañar que el movimiento chavista haya hecho hincapié en el objetivo de incorporar a la masa de los venezolanos no representados, de conformidad con la democracia social radical, en lugar de privilegiar la lucha sindical. El enfoque en la masa de la población en vez de los intereses corporativos de la clase obrera industrial se presta a las consignas de la democracia social radical, la democracia participativa, el nacionalismo y el humanismo que ocupan un lugar destacado en el discurso chavista.

Estos diversos planteamientos ayudan a arrojar luz sobre el modelo emergente en Venezuela de la democracia social radical. A un número importante de venezolanos, en particular aquellos anteriormente marginados de la vida económica, social y política de la nación, se les ha dado la oportunidad de participar en la discusión y actividad en la comunidad, el lugar de trabajo y espacios políticos, y han sido movilizados continuamente con fines políticos. Al mismo tiempo, los viejos mecanismos de controles diseñados para evitar el abuso de poder, que los chavistas consideraron ineficaces, han sido descartados en nombre del gobierno de las mayorías o «la democracia radical». Las deficiencias institucionales resultantes han mermado hasta cierto grado el buen funcionamiento de los consejos comunales, las cooperativas y las misiones educativas que sustentan la democracia social radical.

### **La incorporación social**

A raíz del fallido golpe y la huelga general en 2002-2003, los chavistas dieron prioridad a los programas sociales destinados a fomentar la preparación educativa y cultural de los numerosos miembros de los sectores populares de Venezuela, que habían llegado a la defensa del gobierno durante los dos conflictos. El programa de las misiones creó un sistema unificado que va desde clases de alfabetización, primaria, secundaria y universitaria e incluyó

la colocación de los estudiantes en la fuerza laboral. La misión «Vuelvan Caras», conocida como «la misión de las misiones», fue la pieza central del programa. Consistió de sesiones de entrenamiento de 6 a 24 meses que proporcionaban habilidades que servían para facilitar la transición de la educación al empleo, en particular la participación en las cooperativas. La figura clave en muchos de estos programas sociales fue el «facilitador». Así, el facilitador proporcionaba asesoramiento y asistencia a los consejos comunales y cooperativas y, en el caso de las misiones educativas, se desempeñó como docente en lo que fue concebida como una relación horizontal con los estudiantes. Estos programas privilegian los sectores excluidos. La exclusión, en el discurso chavista, está personificada por aquellos que carecían de empleo en la economía formal, los que no sabían leer ni escribir y a los que se les negaba la educación universitaria, a pesar de que había sido considerada durante mucho tiempo un derecho adquirido por los graduados de la escuela secundaria, como fue reconocido en la Constitución de 1999 (artículo 103).<sup>2</sup>

Los chavistas en todos los niveles del movimiento han hecho énfasis en la importancia de la preparación educativa y cultural de los sectores más desfavorecidos como parte de un esfuerzo integral. Los múltiples objetivos incluyen la instrucción educativa para todas las edades, capacitación laboral, formación ideológica y transformación cultural. Algunos dirigentes chavistas fueron influenciados por la estrategia diseñada por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) que consideraba el desarrollo de los recursos humanos en todas sus dimensiones, incluyendo las relaciones interpersonales, la comunicación y la cultura, como un requisito básico para el desarrollo económico.<sup>3</sup>

Carlos Lanz, un ex guerrillero y teórico de izquierda, llevó a cabo esta estrategia como asesor de la Misión Vuelvan Caras designado por el presidente Chávez y luego como presidente de la empresa de aluminio Alcasa, un cargo que usó para promover la participación de los trabajadores y la comunidad en la toma de decisiones. Lanz escribió que «la revolución bolivariana requiere una campaña de educación permanente para la formación de los explotados y los oprimidos» que abarcaría el ámbito sociopolítico y cultural, la cual facilitaría la «democratización del conocimiento y la ciudadanía» (Lanz Rodríguez, 2006:8-10). Otro líder chavista, quien fue alcalde de Carora y después diputado nacional, Julio Chávez, afirmó: «tenemos que dar mayor peso a la preparación de todos los actores que participan en la actividad de la toma de decisiones, tales como el presupuesto participativo, y dotar a nuestro pueblo con los instrumentos que les permitan efectuar la transformación del Estado»

<sup>2</sup> Entre 2007 y el presente, he conducido 64 entrevistas largas con miembros de cooperativas y de los consejos comunales, así como activistas y líderes políticos chavistas en toda Venezuela, como parte de un proyecto titulado «El Estado y organizaciones políticas y sociales en la democracia: el caso venezolano», financiado por el Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente.

<sup>3</sup> Entrevista personal con Elías Jaua, ministro de la Economía Popular, 27 de enero de 2006, Caracas.

(Harnecker, 2008:37, 76). En sentido similar, poco después de su reelección en 2006, Chávez anunció que un eje fundamental de su gobierno era «moral y luces», el cual definió como «educación con valores socialistas» y que iba más allá del aula mediante «la promoción de la educación en todos los espacios».

La política del Gobierno en general, y los programas educativos en particular, favorecieron a los sectores desfavorecidos de la población. Así, por ejemplo, el programa de ayuda estudiantil Gran Mariscal de Ayacucho, que fue fundado en 1975, comenzó a dar preferencia a los estudiantes de bajo ingreso como los beneficiarios de subvenciones y préstamos para estudiar en el extranjero. En el pasado se requería que el estudiante tuviera un fiador, con el fin de garantizar el reembolso de los préstamos. El gobierno de Chávez consideró que el requerimiento era discriminatorio contra los estudiantes de bajo ingreso y lo eliminó, y luego transformó los préstamos en becas. Al mismo tiempo envió un mayor número de estudiantes a las universidades del tercer mundo, y excluyó a las universidades norteamericanas del programa.

El programa social que ha tenido el mayor impacto en activar a los sectores marginados de la población y en facilitar su participación en la toma de decisiones ha sido los consejos comunales financiados por el Gobierno.<sup>4</sup> Tras la promulgación de la Ley de Consejos Comunales en 2006, surgieron 20.000 consejos en todo el país. Estos se componen de 200 a 400 familias quienes se reúnen en asambleas de vecinos para discutir los proyectos prioritarios. En algunos casos los consejos comunales diseñan y administran proyectos de obras públicas y construcción de viviendas, actividades que anteriormente fueron realizadas por el gobierno municipal, estatal o nacional. Los líderes de los consejos comunales (llamados «voceros») desempeñan sus funciones de forma gratuita y todos son del mismo rango. Los voceros pertenecen a los diferentes organismos de los consejos comunales, tales como el banco comunal (el cual hasta 2009 estaba organizado como una cooperativa) a cargo de las finanzas, y una «contraloría social» que supervisa los gastos.

Otros programas que están vinculados a las comunidades y han inscrito a cientos de miles de venezolanos no privilegiados son las misiones educativas, que consisten de clases de alfabetización (Misión Robinson), como también educación a nivel de escuela secundaria (Misión Ribas) y universidad (Misión Sucre). Las Misiones Robinson y Ribas usan video cassetes y facilitadores en lugar de docentes como una innovación práctica que disminuye los

<sup>4</sup> Este trabajo no pretende evaluar el éxito de los programas sociales desde el punto de vista de su eficacia y los recursos invertidos. Sin embargo, parte de la presunción de que en términos generales han sido beneficiosos para las clases populares, ya que existe un consenso en Venezuela en este sentido. Por ejemplo, en la actualidad los partidos de la oposición, incluyendo a los candidatos presidenciales Manuel Rosales (en 2006) y Henrique Capriles Radonski (en 2012), han propuesto mejorar la administración de estos programas, comprometiéndose en no eliminarlos. Para trabajos que ofrecen criterios para evaluar los programas sociales, ver D'Élia y Cabezas, 2008; García-Guadilla, 2007a, 2008; López Maya y Lander, 2009:75-78, 84-86; Lovera, 2008.

costos, pero también, naturalmente, la calidad. Los estudiantes de la Misión Sucre toman cursos llamados «Proyectos» en los cuales investigan y participan en actividades en las vecindades y, en algunos casos, diseñan propuestas con el fin de solicitar financiamiento del Estado. Varias carreras en el programa de la Misión Sucre se centran en la participación en la comunidad, como en el área de la sociología (Gestión Social para el Desarrollo Local), la medicina (Medicina Integral Comunitaria) y estudios ambientales (Gestión Ambiental).

Aunque pertenecen a los sectores menos favorecidos, los inscritos en la Misión Sucre, según observación del autor, tienen en general la misma capacidad de aprendizaje y la motivación de sus homólogos en las universidades regulares, pero carecen de altas calificaciones, recursos e influencias para entrar en el sistema universitario tradicional y progresar a un ritmo normal.<sup>5</sup> Las Misiones Ribas y Sucre no tienen la infraestructura organizacional de las escuelas públicas establecidas. En la mayoría de las ciudades, la Misión Sucre carece de un núcleo y las clases se imparten en diferentes escuelas públicas en la noche. Además, aunque las universidades no autónomas que colaboran emiten diplomas en su propio nombre (en lugar del de la Misión Sucre), su papel se limita principalmente a diseñar los programas del curso y evaluar las tesis de grado. En las tres misiones, un vocero que representa a los estudiantes de cada sección colabora con las autoridades de la escuela.

Otra actividad promovida por el Gobierno con importantes implicaciones sociales fue el programa de las cooperativas de trabajadores, que recibió una inyección masiva de crédito entre 2004 y 2006 cuando en gran parte fue eclipsado por los consejos comunales. Los miembros de cooperativas, a quienes el presidente Chávez instó a desechar el materialismo y el «afán de lucro», fueron obligados a realizar proyectos en sus respectivas comunidades, como por ejemplo trabajos de mantenimiento en las escuelas. A su favor, el movimiento cooperativo absorbió un gran número de personas pobres con poca experiencia en la economía formal, quienes aprendieron habilidades administrativas y fueron expuestas a nuevas actitudes hacia la cooperación y la solidaridad. Miles de cooperativas han sobrevivido la prueba del tiempo y llevan a cabo trabajo comunitario de forma gratuita, aunque algunas de sus prácticas no se ajustan a la visión de una revolución en los valores. Sin embargo, la mayoría de las cooperativas eran pequeñas, ya que constaban de cinco miembros (el mínimo requerido por la ley), quienes eran frecuentemente parientes. Algunas eran empresas privadas que se hicieron pasar por cooperativas con el fin de recibir contratos, préstamos y exención de impuestos.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Esta afirmación se basa en mi propia experiencia de haber dado clase en el programa en dos diferentes escuelas (conocidas como «aldeas»). Entre 2008 y 2010, enseñé cuatro materias en la Misión Sucre en Barcelona, Anzoátegui, para estudiantes en las carreras de Gestión Local y Derecho.

<sup>6</sup> Para testimonios de los participantes en el movimiento venezolano de cooperativas que documentan los aspectos positivos y negativos discutidos en este trabajo, ver Lucena, 2007.

Los programas sociales y otros aspectos de la democracia social radical de Venezuela contribuyen al empoderamiento de los sectores populares. El empoderamiento ocurre cuando las personas están convencidas de que sus esfuerzos colectivos han producido los resultados deseados, y seguirán haciéndolo en el futuro. El concepto implica hacer valer la autonomía, aunque en el caso venezolano el Estado está en el centro de los esfuerzos de estimular la participación social. Algunos ejemplos incluyen a los miembros de los consejos comunales cuando terminan exitosamente un proyecto de obras públicas o cuando las autoridades responden positivamente a su solicitud de establecer una tienda Mercal en su comunidad. Un sentido de eficacia similar se manifiesta en la afirmación de los estudiantes de la Misión Sucre de que sus títulos representan la misma preparación y esfuerzos que los de sus homólogos en las universidades tradicionales, como también la chavista Universidad Bolivariana, y por lo tanto deberían recibir el mismo reconocimiento y beneficios. Finalmente, las conversaciones cotidianas entre los residentes de los barrios a menudo giran en torno a los detalles de los programas sociales, y en el proceso crean un sentido de identificación social y de experiencias compartidas que conducen al empoderamiento.<sup>7</sup> El discurso chavista del poder para el pueblo y la base comunitaria de los programas también realzan el empoderamiento y ayudan a distinguir entre la democracia social radical venezolana y otros tipos de gobierno cuyas políticas sociales están impulsadas por estrategias paternalistas.

Los programas sociales del Gobierno contienen aspectos negativos y controvertidos, aunque se han tomado algunas acciones en la forma de correctivos. En primer lugar, el Gobierno no estableció mecanismos eficaces para sancionar a los miembros de los consejos comunales y cooperativas en los casos de manejo inescrupuloso o negligente de los fondos públicos. Hasta ahora, el gobierno de Chávez se ha mostrado reacio a tomar medidas firmes contra los infractores con el fin de dar un ejemplo, particularmente en el caso de los grupos de bajos ingresos. Sin embargo, los organismos estatales que financian a los consejos comunales han puesto en práctica diversos procedimientos de inspección con el fin de evitar el otorgamiento de nuevas asignaciones a consejos comunales que no han completado satisfactoriamente los proyectos financiados por el Estado. Esta amenaza pesa en gran manera sobre los líderes comunales que han invertido tiempo y esfuerzo considerables en el lanzamiento de su consejo comunal.

En segundo lugar, la incorporación de un gran número de venezolanos de bajos ingresos en una variedad de programas sacrifica la calidad a favor de la cantidad, y en algunos casos favorece a ciertos grupos a expensas de otros. La Misión Sucre ofrece ejemplos de las

---

<sup>7</sup> Otro ejemplo del empoderamiento ocurrió en 2008 cuando el Gobierno respondió a la solicitud del sindicato de los trabajadores siderúrgicos de nacionalizar la empresa Sidor, de propiedad extranjera, en medio de una disputa laboral violenta, y en el proceso se revitalizó el movimiento sindical a nivel nacional.



ventajas y desventajas en este sentido. Los «perdedores» son los estudiantes de las universidades tradicionales públicas y privadas, quienes tienen que competir con los graduados de la Misión Sucre en el mercado laboral. De acuerdo con algunos de ellos, los criterios más bajos de las misiones educativas no justifican el otorgamiento de títulos de bachillerato y licenciatura a los estudiantes de los programas. Sin embargo, si las misiones no entregaran diplomas normales, no tendrían éxito en atraer a tan gran número de venezolanos de bajos ingresos. De igual manera, desde una perspectiva de costo-beneficio, las asignaciones a los consejos comunales están expuestas a críticas similares.

En tercer lugar, los programas sociales tienen un contenido político y desempeñan un papel político, y de esta manera se viola la separación de poderes y el divorcio entre las esferas pública y privada que son los principios básicos de la democracia liberal. El gobierno de Chávez utiliza los programas sociales para movilizar con fines políticos. Así que los voceros de la Misión Sucre, que desempeñan un papel de activistas políticos (además de realizar tareas administrativas), son una figura institucionalizada en lugar de autónoma.

Las características más destacadas de la democracia social de Venezuela difieren de los programas de bienestar y las prácticas políticas de los gobiernos anteriores venezolanos. En primer lugar, el número total de los beneficiarios y participantes no tiene equivalente antes de 1998 (Weisbrot, 2011:201-206). Para el año 2009, por ejemplo, se habían graduado más de 600.000 de la Misión Ribas. Además, los programas bajo la presidencia de Chávez, a diferencia del pasado, dan prioridad a los intereses de las clases populares a costa de otros sectores de la población. Así, por ejemplo, Mercal ha abierto abastos y supermercados en los barrios de las clases populares (pero no en las urbanizaciones) que venden productos subsidiados por lo general entre 30 y 40 por ciento de descuento, lo que representa una forma de «competencia desleal» con respecto a los intereses comerciales privados.

Además de las políticas sociales de juego de suma cero, la democracia social de Venezuela ha promovido la movilización política permanente de los sectores populares a una escala sin precedentes en la historia venezolana del siglo XX. La creación de células chavistas que comenzó con la campaña para la elección revocatoria presidencial en 2004 ha facilitado esta participación masiva. Más recientemente, los «batallones» (que constan de varios cientos de miembros) del partido chavista, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se dedicaron al trabajo de campaña para las elecciones locales de 2008. Al año siguiente, los batallones fueron reemplazados por las «patrullas» de 20 a 30 miembros. En resumen, la participación e incorporación política de un gran número de venezolanos de bajos ingresos durante un periodo prolongado de tiempo no tienen precedentes en la historia venezolana moderna y se destacan como una hazaña de la democracia social radical de Venezuela.

Después de doce años y medio de gobierno chavista, el balance para el logro de los objetivos de la democracia social radical de Venezuela es variado. En el presente trabajo se

han puesto de manifiesto diversas formas en que los programas sociales, las organizaciones financiadas por el Estado, la constante movilización política y el discurso chavista sobre la participación popular han contribuido a la transformación de los sectores populares de la población. Los elementos esenciales de este proceso incluyen: la educación; la incorporación de los sectores anteriormente excluidos; el empoderamiento, como lo demuestra la creencia chavista de la base de que las decisiones adoptadas por Chávez son una respuesta a sus demandas; y la participación directa en la toma de decisiones, como la realización de los proyectos de obras públicas por parte de los consejos comunales. Sin embargo, además de las fallas institucionales (como discutiremos más adelante), la democracia social radical de Venezuela ha tenido varias deficiencias importantes. En primer lugar, el alto índice de fracaso de las cooperativas y los consejos comunales y la corta duración de los movimientos sociales han desmotivado a algunos de sus miembros. En segundo lugar, hay poca evidencia de un cambio fundamental en los valores éticos, incluso en el caso de los chavistas incondicionales, como es reconocido por los partidarios del gobierno que atribuyen el mal funcionamiento de muchas cooperativas y (aunque a menor grado) de los consejos comunales al comportamiento deshonesto de quienes los dirigen.

### **Democracia radical y social: deficiencias institucionales y organizacionales**

Los militares rebeldes liderados por Chávez que dieron el golpe de febrero de 1992 pedían una revisión radical del sistema político de la nación y fueron más allá de las reglas de la democracia electoral para tratar de alcanzar sus objetivos. Posteriormente, sin embargo, el movimiento chavista cambió su curso. Desde que el partido MVR de Chávez tomó la decisión de abandonar el abstencionismo y participar en las elecciones presidenciales de 1998, los chavistas han respetado dos aspectos fundamentales del sistema político establecido: la democracia electoral y el sistema de partidos políticos. La vía electoral sirvió como vehículo para desplazar a las viejas estructuras que los chavistas consideraban obstáculos para el cambio radical. Así, en 1999, la Asamblea Nacional Constituyente, un cuerpo electo controlado por los chavistas, reemplazó al Congreso Nacional hasta que se realizaran nuevas elecciones para la Asamblea Nacional, la cual se consideraba más sensible a los intereses populares. En los años siguientes, las elecciones en todos los niveles se caracterizaron por la disminución de la tasa de abstención y (con la excepción del boicot de la oposición de las contiendas de 2005 para la Asamblea Nacional) la participación multipartidista (Hellinger, 2007:69).

Al mismo tiempo, el presidente Chávez rompió con la tradición corporativista de Venezuela de conformidad con el concepto del mandato de las mayorías promovido por la democracia radical. En este sentido, discontinuó la práctica de nombrar representantes de Fedecamaras (y del sector empresarial en general) en los puestos ministeriales encargados de la formulación de la política económica. Además, descartó la política gubernamental vigente

durante décadas de consenso y consulta con los partidos de oposición y otras organizaciones y la formación de comisiones tripartitas, cuyos miembros eran seleccionados por la cúpula empresarial y sindical. De este modo, Chávez sostenía que el Gobierno debería estar en constante consulta con el pueblo y no con las élites políticas. En otro cambio fundamental, Chávez detuvo la tendencia hacia la descentralización de los poderes que había avanzado durante los gobiernos neoliberales en la década de 1990. En lugar de la transferencia de la autoridad del gobierno federal a las gobernaciones y alcaldías, los chavistas promovían la toma de decisiones a nivel vecinal, la cual consideraban más propicia para la participación directa de los sectores populares.

Estas transformaciones produjeron vacíos institucionales y organizacionales que el movimiento chavista, con su débil estructura organizativa, no estaba en condiciones de corregir. El MVR no logró desarrollar vínculos sociales fuertes y se mantuvo básicamente como una organización electoral hasta que Chávez la reemplazó con el PSUV, con la esperanza de fortalecer su base organizativa. Así que el MVR (y posteriormente el PSUV) no sirvió para facilitar la participación directa de la sociedad en la formulación de los programas sociales, que fueron implementados, pero no diseñados, por los sectores populares de la población.

Además, dada la tradición relativamente débil de los movimientos sociales en Venezuela, no es de extrañar que las organizaciones sociales en gran parte carezcan de autonomía y hayan demostrado ser de corta duración. Ellos, por lo tanto, no jugaron un papel clave en tareas tan fundamentales como el nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los miembros de la Comisión Nacional Electoral, el Fiscal General y el Contralor Nacional, tal como fue concebido por la Constitución de 1999 (artículos 264 y 279). Finalmente, la extrema polarización y politización de Venezuela (de mayor intensidad que los años anteriores), en la que los chavistas y la oposición se encontraban en un estado de confrontación permanente, militaba en contra del sistema de controles institucionales, ya que cualquier denuncia contra funcionarios del Gobierno se trasladaba inmediatamente al campo de batalla política.<sup>8</sup>

Desde el primer momento, la rama ejecutiva del gobierno chavista asumió mayor poder, al mismo tiempo que Chávez se convirtió en el líder indiscutible dentro de su movimiento, lo que excluyó cualquier tipo de toma de decisiones colectiva formal o el surgimiento de un segundo en el mando. La Constitución de 1999 fortaleció la autoridad del Ejecutivo en varios aspectos, tal como el ascenso de los oficiales del ejército, que se convirtió en el dominio exclusivo del Presidente sin la participación de la Asamblea Nacional. La Constitución

<sup>8</sup> Varios libros importantes de científicos políticos (y otros académicos) que subrayan la importancia de la incorporación y empoderamiento de las clases populares en Venezuela también reconocen la debilidad institucional (Fernandes, 2010:233-255; Hellinger, 2011:34-37; Silva, 2009:224-229; Smilde, 2011:11-13, 21-25).

también revirtió la tendencia hacia la descentralización mediante la creación de un organismo para facilitar la participación federal en decisiones que anteriormente correspondían exclusivamente a las gobernaciones y a los municipios (Ellner, 2011:119-120). En 2009 el Ejecutivo nacional tomó el control de los aeropuertos y puertos que habían sido transferidos a los estados en 1989.

Mientras algunos prochavistas expresan preocupación por la acumulación de poder de Chávez, pero la ven como un mal necesario para hacer frente a los poderosos adversarios, otros la consideran un aspecto indiscutiblemente positivo de la política venezolana. En un ejemplo del último punto de vista, el líder estudiantil nacional Robert Serra llamó «insustituible» a Chávez y expresó que tiene una «relación mágica»<sup>9</sup> con el pueblo. Del mismo modo, la politóloga Diana Raby señala incidentes específicos en los que Chávez ha respondido a un clamor popular al interpretarlo y transformarlo en propuestas concretas. Raby describe esta interacción como una «dialéctica entre Chávez y el pueblo», o más específicamente sus seguidores «incondicionales». Ella continúa afirmando que esta dinámica «puede despertar sospechas de populismo o caudillismo [...] pero hasta ahora ha demostrado ser [...] más sensible a los sentimientos reales de la gente y más democrático [...] que cualquier partido tradicional o mecanismo gubernamental» (Raby, 2006:62-63).

Un efecto secundario negativo de la autoridad absoluta de Chávez en el Gobierno y su movimiento es que desalienta la selección, por parte de la base, de otros líderes chavistas para ocupar posiciones de liderazgo. Esta falla, a su vez, frena la clarificación de las distintas posiciones políticas e ideológicas dentro del movimiento (Monedero, 2009:192). En cualquier partido político, la rivalidad interna ayuda a dilucidar las diferencias políticas, aun cuando los miembros de la base puedan estar, en gran medida, influenciados por el carisma de sus líderes. En el caso de los chavistas, la institucionalización de la selección del liderazgo del movimiento sin interferencia estatal pudiera servir como un correctivo a la falta de mecanismos formales para canalizar las opiniones de la base en una dirección ascendente.

El papel activo que desempeñan las principales figuras del gobierno en los asuntos del PSUV, como lo demuestran las posiciones de liderazgo en el partido asumidas por los ministros y gobernadores chavistas, privó a la organización de la independencia necesaria para servir como un control sobre el desempeño del Estado. Así, por ejemplo, el poder dado al ministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez, quien al mismo tiempo se desempeña como presidente de la empresa petrolera estatal PDVSA, pone en evidencia la invasión estatal de terrenos antiguamente ocupados por los partidos políticos y los líderes políticos y sociales. Ramírez fue nombrado vicepresidente del PSUV para la región andina y abiertamente apoyó

<sup>9</sup> R. Serra en entrevista con Carlos Croes, Televen, 18 de enero de 2009.

la lista ganadora en las elecciones del recién unificado sindicato de trabajadores petroleros, la Federación Única de Trabajadores Petroleros (FUTPV), realizadas en 2009.

La presencia limitada del MVR fuera de la arena electoral y de la Asamblea Nacional reflejó la falta de desarrollo organizacional del movimiento chavista. Como una reacción contra las prácticas hegemónicas de los partidos tradicionales, los líderes del MVR hicieron una decisión consciente de evitar la intervención en los movimientos sociales y laborales, y por lo tanto eliminaron los vínculos orgánicos con organizaciones sociales establecidas en el momento de la fundación del partido en 1997. Como resultado, el MVR centró sus esfuerzos en la actividad electoral y su rol legislativo.

Las elecciones internas realizadas por el partido chavista fueron diseñadas para abrir la organización a las bases y contrarrestar las tendencias burocráticas que Chávez criticó enérgicamente. El artículo 67 de la Constitución exige este procedimiento para la selección de los candidatos y los puestos de liderazgo de todos los partidos políticos, aunque el requerimiento fue casi totalmente ignorado por la oposición (hasta febrero de 2012). La primera elección interna chavista se llevó a cabo en abril de 2003 para elegir a las autoridades nacionales del MVR, la segunda en abril de 2005 para los candidatos a los consejos municipales. Posteriormente el PSUV celebró elecciones primarias en junio de 2008 para escoger los candidatos a gobernadores y alcaldes del partido para las elecciones de noviembre, luego en 2009 para seleccionar los delegados del Congreso Extraordinario del Partido, seguidas por el proceso interno para la contienda de septiembre de 2010 para la Asamblea Nacional. En una decisión que generó descontento interno, Chávez nombró a su ex vicepresidente Diosdado Cabello en importantes cargos ministeriales y partidistas en 2009, a pesar de que le había ido muy mal tanto en las elecciones internas como la de gobernador, y al mismo tiempo pasó por encima del más popular Aristóbulo Istúriz, quien había sido escogido candidato a la alcaldía por el PSUV en Caracas con el 94 por ciento de los votos chavistas.

Las tres últimas primarias del PSUV pusieron en evidencia las fortalezas y debilidades del modelo democrático que surgió bajo la presidencia de Chávez. En las tres elecciones participó el 40-50 por ciento de los votantes del partido. Además el PSUV prohibió el uso de propaganda pagada en estas contiendas con el fin de nivelar el campo de juego, aunque en algunos casos funcionarios públicos y los apoyados por ellos utilizaron recursos del Estado. Por lo menos en dos estados (Guárico y Mérida) los candidatos respaldados por un gobernador muy impopular o controversial fueron derrotados en las primarias de 2008. Después de las primarias de 2009, discutieron temas específicos, en forma simultánea, los delegados al congreso del PSUV y las patrullas (las células del partido).

En el lado negativo, un gran número de chavistas se opuso a los procedimientos que se prestaban a manipulación y pasaban por encima de la voluntad de la base del partido

(Fernandes, 2010:85-86). En muchos estados, por ejemplo, los gobernadores y alcaldes chavistas controlaron el proceso electoral al usar recursos de gobernaciones y alcaldías y aprovecharse de su influencia sobre los empleados públicos para promover listas (o «chuletas») de sus incondicionales. El problema radicó en la falta de separación entre el partido y el Estado (incluyendo gobernadores, alcaldes y ministros), un principio que la democracia liberal considera prácticamente sagrado, pero que la democracia radical en Venezuela ha tendido a pasar por alto.

Varias figuras importantes, como el ex vicepresidente del PSUV Alberto Müller Rojas y la reconocida marxista chilena Marta Harnecker (quien se radicó en Venezuela), pidieron mayor independencia partidista. Harnecker propuso programas para capacitar a los activistas del partido a fin de evitar la escogencia de los funcionarios del gobierno como líderes del partido (Harnecker, 2009:148-149). En su programa semanal de televisión «Aló Presidente», el 6 de diciembre de 2009, que se celebró en el Congreso Extraordinario del PSUV, Chávez pareció tener en cuenta este punto de vista cuando hizo un llamado a los gobernadores y alcaldes chavistas elegidos como delegados a regresar a sus localidades por cuanto no podían llevar a cabo las dos funciones simultáneamente. Aunque la declaración de Chávez no fue a la raíz del problema de la subordinación del partido, animó a las bases a asumir una posición más firme. Algunos delegados al congreso comenzaron a utilizar la línea de razonamiento de Chávez para cuestionar el nombramiento de ministros como vicepresidentes del PSUV. El asunto de la autonomía del partido, sin embargo, fue eludido en gran medida cuando se les permitió a los delegados que eran al mismo tiempo funcionarios electos elegir sustitutos que asistieran al congreso en su ausencia. Del mismo modo, en 2010 Chávez hizo un llamado a los gobernadores y alcaldes para que se abstuvieran de interferir en las primarias del partido para la Asamblea Nacional, pero su petición fue en gran parte ignorada.

El anuncio de Chávez de que las primarias se realizarían para elegir candidatos para las elecciones de 2010 de la Asamblea Nacional también demostró su receptividad a las aspiraciones y demandas de la base de su movimiento, y puso en manifiesto la dinámica que ha caracterizado su presidencia desde su inicio (Raby, 2006:186-194). Anteriormente, otros dirigentes del PSUV (y Chávez mismo) habían dado a entender que se emplearía otro procedimiento menos democrático de escogencia, ya que se vio favorecido por la mayoría de los delegados al Congreso Extraordinario del PSUV.

El PSUV no logró crear estructuras que asumieran el control total de las campañas electorales, lo cual era otra demostración de la debilidad y la falta de autonomía del partido. Las misiones educativas, los consejos comunales y otros programas patrocinados por el Estado llenaron en gran parte el vacío. Ellos jugaron un papel particularmente activo en el referéndum de febrero de 2009 sobre la propuesta de Chávez de levantar los límites de periodos de mandato. Durante la campaña, Chávez llamó la atención sobre el hecho de que

«por primera vez, las misiones se han presentado como actores políticos y como vanguardia de la lucha revolucionaria» (discurso pronunciado en Zulia, 20 de enero de 2009). En el caso de las misiones educativas, los facilitadores y los voceros organizaron comités de entre seis y ocho miembros para hacer campaña a favor de la propuesta de enmienda constitucional. El «Frente Misión» agrupó estos comités a nivel estatal, mientras comités similares creados por los consejos comunales pertenecían al «Frente Social». En una demostración adicional del ejercicio de poder del Estado, tradicionalmente asumido por los partidos políticos, los alcaldes chavistas (quienes controlaban el 80 por ciento de los municipios en ese momento) encabezaron la organización de la campaña chavista en sus respectivas localidades. En contraste, el PSUV, cuyas células —conocidas como «batallones»— habían participado activamente en las campañas para las elecciones municipales-estatales que se celebraron tres meses antes, tuvo menos presencia en la campaña de febrero de 2009.

Diferentes aspectos de los modelos políticos discutidos en este trabajo explican las debilidades institucionales y organizacionales de la presidencia de Chávez. En primer lugar, el rechazo del movimiento chavista al modelo de la democracia liberal se ha traducido en la eliminación de la brecha entre el Estado y la esfera de los partidos políticos. Las incursiones del Estado en la arena política y la abierta politización de los viejos y nuevos espacios han aminorado el papel de los partidos de gobierno. En segundo lugar, la aversión a la «democracia liberal» (y su concepto de «los derechos de las minorías») ha conducido al desmantelamiento de los mecanismos corporativistas que por décadas habían otorgado a las organizaciones sectoriales como Fedecamaras una participación permanente en la toma de decisiones. El establecimiento de alternativas institucionales a las estructuras corporativistas se ha retrasado porque las organizaciones sociales, que de acuerdo con la Constitución de 1999 iban a jugar un importante papel consultivo, han tendido a ser de corta duración (Sosa, 2007:51-53).

En tercer lugar, los dirigentes chavistas siempre han atacado a los partidos tradicionales por haber ejercido un control estricto de los sindicatos y otros movimientos sociales antes de 1998, una práctica que algunos politólogos caracterizaron como la «democracia partidista» (Coppedge, 1994). Los líderes del MVR tuvieron una reacción exagerada a la democracia partidista al abstenerse de establecer vínculos orgánicos con los movimientos sociales que pudieran haber facilitado un flujo bidireccional de información, propuestas y puntos de vista entre las dos esferas. De esta manera se perdía la oportunidad de desarrollar el partido desde el punto de vista organizativo y quedó restringido en gran medida a las arenas electorales y legislativas.

La preferencia de los chavistas por la democracia social radical también ha retrasado de alguna manera el crecimiento organizacional e institucional. Los defensores de la democracia radical y del mandato de la mayoría justifican la expansión del poderío de

la rama ejecutiva y la autoridad prácticamente absoluta de Chávez dentro de su movimiento con base en que la popularidad del presidente no tiene equivalentes entre los dirigentes por debajo de él. Esta posición hegemónica ha desalentado el debate interno que pudiera haber fortalecido al MVR y al PSUV, y conducido a la selección directa de los líderes partidistas por parte de la base.

Además, el argumento en favor de la democracia social radical en Venezuela se basa en la presunción de que el Estado necesita ser flexible y evitar la aplicación rígida de las normas y reglamentos, con el fin de fomentar la participación de los sectores marginados y su incorporación en los organismos experimentales, tales como las cooperativas y los consejos comunales (Ellner, 2009:14). Esta práctica, sin embargo, frena el desarrollo de controles institucionales efectivos sobre las grandes sumas de dinero que han sido asignadas a los programas sociales. Recientemente el Gobierno ha tomado medidas modestas para corregir esta deficiencia. La Ley Orgánica de los Consejos Comunales aprobada en diciembre de 2009, por ejemplo, fue diseñada para ampliar la responsabilidad de las transacciones fiscales, que anteriormente se limitaba, a menudo, al autoproclamado jefe del banco comunal (Martínez y otros, 2009:135). La ley también abrió la posibilidad de la intervención de las contralorías del Estado en los consejos comunales (Artículo 35).

La democracia social radical en Venezuela tiene otras implicaciones organizacionales e institucionales. La base social del chavismo se centra en las clases populares. La movilización constante de los sectores populares que participan en los programas sociales, las manifestaciones políticas y su ingreso en el PSUV (que como partido de masas rompió con el concepto leninista de partido de vanguardia) han conducido al sentido de empoderamiento y la inclusión, que son la piedra angular de la democracia social radical. La movilización de un gran número de personas y su participación también compaginan con el concepto del mandato de la mayoría asociado con la democracia radical, lo que contribuye a la legitimidad del gobierno chavista frente a una oposición que cuestiona su compromiso democrático. No obstante, el control burocrático estatal del PSUV limita la eficacia de la participación de la base en la toma de decisiones del partido, lo cual pudiera servir como una instancia de control sobre el desempeño del Gobierno. La balanza de poderes y rendición de cuentas, aunque se asocian con la democracia liberal, son una modalidad fundamental para la institucionalización del modelo chavista en una manera que evite el socialismo burocrático al estilo soviético, rechazado rotundamente por los chavistas.

### **La democracia social y el debate sobre el papel del Estado**

Dos posiciones opuestas (con graduaciones entre ellas) sobre el papel del Estado han surgido en el movimiento chavista, con importantes implicaciones para el modelo de la democracia social radical. Una posición de la línea dura recuerda la insistencia de Lenin en



la necesidad de liquidar el Estado existente con el fin de alcanzar el socialismo. También postula la existencia de un conflicto irreconciliable entre el «poder constituyente» (los movimientos sociales y la población en general) y el «poder constituido» (la burocracia estatal y la dirigencia de los partidos políticos).<sup>10</sup> El enfoque de línea dura considera los programas sociales y las organizaciones sociales que representan la base chavista como arenas fértiles para organizarse contra el poder constituido, pero pone en duda la capacidad del Estado para desempeñar un papel constructivo en la promoción de los objetivos de la democracia social radical. Los de la línea dura presumen que existe un alto nivel de conciencia de las clases populares y llegan a la conclusión de que en Venezuela están dadas las condiciones subjetivas para transformaciones de gran alcance.

Un segundo punto de vista más moderado reconoce que los chavistas heredaron un Estado burgués, como resultado de la vía electoral al poder. La posición moderada visualiza una «guerra de posición» (según la estrategia desarrollada por Antonio Gramsci) en la cual los revolucionarios van ocupando de manera constante viejos y nuevos espacios en la esfera pública. En consecuencia, el objetivo no es destruir el Estado (como Lenin planteó y como Gramsci creía iba a pasar con el transcurso del tiempo), sino transformarlo, al menos en parte. En última instancia, el Estado refleja la correlación de fuerzas en un momento dado, como planteó Nicos Poulantzas. Marta Harnecker, por ejemplo, señala que en el gobierno de Chávez «cuadros revolucionarios están a cargo de las instituciones del Estado y son conscientes de que deben [...] trabajar con los sectores organizados de la población para controlar lo que las instituciones hacen y para presionar por la transformación del aparato estatal», y como resultado es posible hasta cierto punto «para estas instituciones trabajar en favor del proyecto revolucionario». Al mismo tiempo, ella insta a «sentar las bases de nuevas instituciones [...] mediante la creación de espacios de abajo hacia arriba» (Harnecker, 2010:34).

Los que defienden la posición moderada niegan que los sectores del Estado y la sociedad sean monolíticos o puedan ser reducidos a poderes constituyente y constituido. Ellos acusan a los de la línea dura de dirigir su ataque contra la burocracia chavista y en el proceso apartarse de la lucha contra el verdadero enemigo, que es la oposición organizada. En ocasiones los moderados hacen un llamado a la burocracia estatal a que simplemente se abstenga de interferir en la lucha de los sectores populares, tales como los sindicatos, contra sus enemigos de clase (Webber y Spronk, 2010:30).

<sup>10</sup> El concepto de «poder constituyente» y «poder constituido», que reemplaza la lucha de clase como la fuente principal de conflicto, es usado por escritores inspirados por el pensamiento posmoderno y antiestatista, como Antonio Negri y John Holloway, así como por los que en Venezuela se adhieren a la posición radical sobre el Estado.

La posición moderada sobre la transformación del Estado en el marco del socialismo de «ensayo y error» es compatible con la estrategia de la democracia social radical, que está diseñada para preparar las condiciones subjetivas para los cambios estructurales profundos. La posición moderada reconoce la importancia de los programas del Gobierno y otras iniciativas «desde arriba» que tienen como fin alcanzar las metas asociadas con la democracia social radical. Los que defienden el punto de vista moderado apoyan una versión no dogmática del pensamiento marxista que pone de manifiesto las contradicciones en todos los niveles de la sociedad y sus instituciones (como enfatizó Louis Althusser) y la necesidad de librar una lucha, en particular en el frente ideológico (como destacó Gramsci), con el fin de ocupar nuevos espacios (Billbao, 2008:136-137). En contraste, la posición de la línea dura se centra en la confrontación de clase frontal, incluso en el ámbito estatal. También se descarta la necesidad de aplazar el proyecto socialista con el fin de preparar a los sectores más desfavorecidos para el papel que deben desempeñar en la nueva sociedad socialista, una tarea que es la razón de ser de la democracia social radical.

Defensores influyentes de la posición de la línea dura sobre el Estado incluyen al activista de movimientos sociales Roland Denis, quien en 2002-2003 fue viceministro de Planificación, y al trotskista británico Alan Woods, quien se ha reunido con Chávez en el rol de asesor. Después de su salida del ministerio, Denis se hizo cada vez más crítico del gobierno, así como del propio Chávez, por dar la espalda a la base chavista y a las organizaciones sociales. Denis afirma que el desarrollo de movimientos sociales fuertes con el lema del «poder popular», que coincidió con la contracción económica del periodo neoliberal a partir de finales de la década de los ochenta, sentó las bases para el «poder constituyente» que surgió después de 1998. Denis advierte que la vitalidad de los movimientos sociales está siendo amenazada por las intenciones intervencionistas de algunos líderes del PSUV, quienes piden al partido que oriente los consejos comunales como una cortina de humo para ejercer el control (ver también, Arconada, 2009:58-60). Al mismo tiempo rechaza el argumento de los alcaldes chavistas de que los consejos comunales no han recibido suficiente financiamiento porque no han presentado propuestas viables. Denis y otros de la línea dura también acusan a los líderes políticos chavistas (el poder constituido) de haber frenado la movilización de las masas en el momento de los intentos de derrocar a Chávez en 2002 y 2003 y de haber «demostrado una falta de vocación de poder» (López Sánchez, 2009:58-60). En los últimos años, Denis ha argumentado que los centristas y derechistas han logrado ocupar los cargos ministeriales claves y niega que estos chavistas se puedan ver como separados de, o menos peligrosos que, la oposición organizada (Denis, 2003; 2006:29-35).

Escritores teóricos que han influido en el movimiento chavista a favor de la posición moderada sobre el Estado, como Marta Harnecker, el escritor alemán-mexicano Heinz Diete-

rich y el izquierdista argentino Luis Bilbao, difieren de los de la línea dura en su evaluación de las condiciones subjetivas.<sup>11</sup> Bilbao señala que las condiciones subjetivas no deberían ser sobreestimadas, ya que incluso las nuevas estructuras creadas por Chávez están sujetas a los vicios del pasado, así como a la fragmentación extrema. Dado el retraso en las condiciones subjetivas, el PSUV no debería, al menos por el momento, llamarse a sí mismo «marxista» (Bilbao, 2008:151, 219; Harnecker, 1999:65). Bilbao, de acuerdo con el punto de vista de Gramsci sobre la importancia de la ideología en el logro de la hegemonía, sostiene que los programas y movimientos sociales no sólo son instrumentos políticos en la lucha contra los adversarios, sino que juegan un papel fundamental en «la formación político-ideológica de las masas». En esencia, la democracia social radical en Venezuela pone en práctica una dinámica de cambio gradual que es menos radical que la confrontación interna de lo que prevé la línea dura. Los programas sociales del Gobierno crean las condiciones para la transformación cultural que facilita la ocupación de espacios por los revolucionarios, tanto dentro como fuera del Estado (Bilbao, 2008:178-219; Sanz, 2007:162-164; Valderrama y Mena, 2005:69).

Las relaciones entre el movimiento chavista y los intereses comerciales están en el centro de las diferencias entre la línea dura y moderada. La posición dura sobre el Estado ve a algunos hombres de negocio como íntimamente ligados a los políticos pro Chávez y considera generalizada la corrupción. Los gobernadores y alcaldes chavistas (poder constituido), por ejemplo, que otorgan los contratos a los grupos capitalistas para los proyectos de obras públicas, en lugar de favorecer a las cooperativas, consejos comunales o pequeñas empresas, terminan estando estrechamente vinculados a los sectores de la élite del campo enemigo. Los que apoyan la línea dura coinciden con la oposición venezolana al afirmar que la corrupción generalizada ha facilitado el surgimiento de nuevos grupos burgueses (conocidos como la «boliburguesía»). Argumentan que en la Venezuela rica en petróleo, a diferencia de la mayoría de los países, «el Estado crea a la burguesía» y no al revés, y que esta tendencia histórica ha continuado con Chávez (Denis, 2009:108-109).

Los miembros chavistas de la base a menudo articulan la posición de la línea dura al expresar su indignación por la corrupción gubernamental. Los miembros de los consejos comunales, por ejemplo, a veces atribuyen los retrasos en el financiamiento de proyectos y, en general, las deficiencias en los servicios públicos a una «quinta columna» dentro del Gobierno con lealtad a los intereses empresariales.<sup>12</sup> Muchos de estos chavistas llegan a

<sup>11</sup> Para una evaluación optimista de las condiciones subjetivas en Venezuela por un defensor importante de la posición de línea dura sobre el Estado, ver Woods, 2008:402-405.

<sup>12</sup> Entrevista personal con Naíke Infantino, directora de la Oficina de Atención Ciudadana de la Alcaldía, 11 de diciembre de 2008, Caracas.

la conclusión de que una guerra total debe ser librada dentro de su movimiento (lo que Chávez ha llamado una «revolución dentro de la revolución») con el fin de depurar sus filas y romper sus vínculos con los empresarios oportunistas.

Los que defienden la posición moderada no niegan el problema de la corrupción y reconocen que algunos empresarios han sacado provecho considerable como consecuencia de los contratos y otras oportunidades proporcionadas por el Estado. Sin embargo, los moderados argumentan que la existencia de hombres de negocio sin ética con conexiones con el Gobierno está muy lejos de ser un bloque chavista consolidado de la burguesía y su penetración en la esfera gubernamental (Brito, 2009). El análisis de los moderados del movimiento chavista y el Gobierno tiende a centrarse en la ineficiencia burocrática y la incompetencia en vez de en la corrupción y la influencia de los grupos económicos. Al mismo tiempo, los moderados cuestionan la tendencia de la oposición y de los chavistas de línea dura de acusar a dirigentes del PSUV de continuas prácticas de corrupción sin aportar pruebas concretas para apoyar sus afirmaciones. Además, por lo general, aceptan como legítimas las relaciones del gobierno de Chávez con los nuevos grupos económicos durante la «etapa de transición al socialismo», pero insisten en que no deberían recibir un trato especial por parte del Estado (Harnecker, 2007: párrafos 137-139).

Los chavistas moderados advierten que con la confrontación interna se corre el riesgo de perturbar la unidad del movimiento, la cual Chávez pide constantemente como un imperativo político. Con su énfasis en los problemas de la ineficiencia, más que el tema de la corrupción, estos chavistas son más propensos a hacer campaña y votar por los candidatos chavistas que no son de su agrado, a diferencia de los más intransigentes de la línea dura. La abstención generalizada de los chavistas explicó la primera derrota electoral del movimiento en el referéndum nacional sobre la propuesta de reforma constitucional en diciembre de 2007.

Hasta 2008, el debate dentro del movimiento chavista sobre estos temas se limitaba principalmente a la discusión informal (Ellner, 2008: 141). Con la derrota electoral de diciembre de 2007, sin embargo, Chávez llamó a un proceso permanente de autocritica con el fin de revitalizar el movimiento por medio de lo que él llamó «reimpulso». Posteriormente, los puntos de vista que reflejaban ambas posiciones sobre el Estado se expresaron con frecuencia en artículos de opinión en la publicación en línea prochavista *Aporrea* (Hellinger, 2009), cuyo cofundador, Gonzalo Gómez, pertenecía a la organización trotskista venezolana «Marea Socialista», así como al PSUV. Algunos chavistas en el Gobierno consideraron exageradas e inoportunas las críticas de *Aporrea*,<sup>13</sup> pero la página web ha seguido una política de publicar

<sup>13</sup> Entrevista personal con Jorge Giordani, ministro de Economía y Finanzas, 23 de enero de 2010.

casi todos los artículos enviados con posiciones de la izquierda. Del mismo modo, el ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, criticó duramente al Centro Internacional Miranda (CIM), un grupo de intelectuales de la izquierda que recibe financiamiento del Ministerio de Educación Superior, debido a sus opiniones críticas. El CIM fue fundado por Marta Harnecker, quien defiende la posición moderada sobre el Estado, pero incluye a activistas intelectuales de línea dura como Denis que afirman que la corrupción ha penetrado completamente en el sector público.

La complejidad de los acontecimientos en Venezuela, debido a la rapidez del cambio, pone en duda la visión simplista en blanco y negro de la línea dura. Al caracterizar a algunos chavistas en el poder como una quinta columna dentro del movimiento chavista, la línea dura implícita o explícitamente minimiza las diferencias entre ellos y los líderes de la oposición. Un gobernador chavista, por ejemplo, que da contratos a los miembros de la élite económica local para proyectos de obras públicas o que no proyecta una imagen revolucionaria, pero tampoco es corrupto, no se puede colocar en el mismo campo de los adversarios de Chávez. El discurso asociado a la línea dura sobre el Estado, que no hace distinciones en este sentido, ha llevado a numerosos seguidores de Chávez de la base a abstenerse de votar en las elecciones locales, en lugar de apoyar a un candidato chavista que no sea de su agrado. Finalmente, al considerar los controles burocráticos como una cortina de humo para promover intereses propios, por no decir propicios para el clientelismo y la corrupción, los de la línea dura caracterizan la regulación estatal de los programas sociales como excesiva e innecesaria, cuando en realidad se ha demostrado, con frecuencia, que es tímida e insuficiente (Ellner, 2009:12-13).

En otros contextos históricos las estrategias leninistas y graduales no se correlacionan necesariamente con las evaluaciones optimistas o pesimistas de la madurez de las condiciones para el cambio revolucionario, o los conceptos de una revolución como un proceso prolongado en contraste con un cambio repentino. Los que afirman que el socialismo solamente puede ser establecido a través de la toma del poder por la fuerza (posición leninista) pueden relegar la revolución a un futuro bastante lejano. Del mismo modo, los inspirados por Gramsci pueden prever la revolución (a diferencia del «proceso revolucionario») como un cambio brusco producido por un solo evento.

En Venezuela, los que defienden la posición moderada sobre el Estado prefieren trabajar con paciencia para ocupar espacios en la esfera pública. En consecuencia, rechazan la visión de la línea dura de una «revolución dentro de la revolución», que se basa en una evaluación sumamente optimista de las condiciones subjetivas. La posición moderada también apoya la insistencia de Gramsci sobre la lucha ideológica, que es un componente importante de la democracia social radical. Además de la ideología, la democracia social se centra en la alfabetización, la educación, capacitación laboral y el empoderamiento en una variedad de

contextos políticos y no políticos. Estos objetivos suponen una evaluación más sombría de la situación actual en Venezuela que la presentada por los chavistas de la línea dura.

### **Conclusión**

Muchos de los escritos teóricos sobre el gobierno de Chávez que señalan la falta de instituciones y organizaciones fuertes (el asunto central de este trabajo) están influenciados por las conceptualizaciones del populismo latinoamericano formuladas en el último medio siglo. Los primeros escritos sobre el populismo asociados con Gino Germani postularon la relación entre el líder populista y sus seguidores como la del caudillo y una masa ignorante, ante la ausencia de las estructuras intermedias viables (Germani, 1962). Los detractores de Chávez usan este concepto para caracterizarlo como un demagogo cuya retórica está desprovista de contenido ideológico y que está libre de cualquier tipo de control organizacional o institucional (Arenas y Gómez Calcaño, 2006:129-156; Castañeda y Morales, 2008:16).

Los escritos revisionistas sobre el populismo que se inició en la década de los setenta presentaban un análisis más matizado del fenómeno, en el cual las organizaciones fueron reconocidas como débiles pero con un potencial de transformación (James, 2000). Más recientemente, Kurt Weyland y Kenneth Roberts, que escribieron sobre Chávez y otros populistas a finales de siglo, también sopesan las características negativas y positivas. Por un lado, los populistas de hoy en día dan voz a los trabajadores de la economía informal que anteriormente carecían de interlocutores en cualquier nivel. Por otro lado, los gobiernos populistas sufren de atraso institucional y organizacional, aunque Roberts reconoce que Chávez no llega al extremo de Fujimori en despreciar las organizaciones bien estructuradas (Ellner, 2004; Roberts, 2007:144).

Más recientemente Kirk Hawkins, en un libro sobre el chavismo y el populismo, atribuye el atraso institucional y organizacional del movimiento chavista y otros movimientos populistas a su visión maniquea del mundo. De acuerdo con esta tesis, el líder populista se percibe como la encarnación de la mayoría contra las fuerzas del mal, un papel que las organizaciones y estructuras intermedias socavan, ya que crean obstáculos entre él y el pueblo (Hawkins, 2010:82-85, 168).

Este trabajo también examina la falta de consolidación organizativa e institucional, pero rechaza el marco simplificado en blanco y negro de los que escriben en la tradición de Germani. El poder indiscutible de Chávez frena el desarrollo de la organización, al desalentar la formulación de una diversidad de posiciones políticas dentro del movimiento y los mecanismos para resolver las diferencias internas. Además, las movilizaciones populares durante un período extendido sin precedente en la historia de Venezuela, que representan un componente esencial de la democracia social radical de Venezuela, han reforzado el vínculo

entre Chávez y sus seguidores a costa de la creación de organizaciones políticas fuertes y duraderas. Del mismo modo, el discurso sobre el mandato de la mayoría (en la tradición de Rousseau) arremete contra los «burócratas» y «tecnócratas» y por lo tanto ayuda a deslegitimar las estructuras de intermediación entre el Poder Ejecutivo nacional y la base.

La estrategia chavista de los programas sociales también contribuye a debilitar las organizaciones e instituciones. Los chavistas han preferido la flexibilidad de las reglas del juego, así como las estructuras rudimentarias y provisionales, en vez de las estructuras establecidas, con el fin de no intimidar a los no incorporados, quienes carecen de confianza en sí mismos. Por otra parte, los chavistas argumentan que la incorporación de los sectores marginados en la vida política, económica y cultural de la nación es una condición previa para la profundización del proceso de cambio. Los miembros de estos sectores, sin embargo, por lo general carecen de las habilidades, disciplina y experiencias organizativas de la clase obrera organizada, así como de la clase media.

La democracia social radical de Venezuela representa un modelo que es distinto tanto del socialismo del siglo veinte como de la política reformista del *welfare state*. A diferencia de la Unión Soviética en la década de los treinta y de otros países comunistas, el gobierno chavista ha dirigido sus esfuerzos a la preparación de los sectores hasta ahora excluidos para la participación en una diversidad de frentes. La gran cantidad de miembros de los sectores populares que han participado en las movilizaciones políticas, han ingresado en los programas sociales y han recibido beneficios otorgados a los pobres a expensas de los grupos más privilegiados, contrasta con las estrategias sociales de los gobiernos reformistas. Por otra parte, las políticas de juego de suma cero durante la presidencia de Chávez han generado una intensa polarización política y social, que también tiene pocos equivalentes en la historia de los movimientos reformistas.

Los acontecimientos en el tercer mandato presidencial de Chávez que comenzó en 2007 apuntan a los desafíos y un cambio en las prioridades y fundamentos ideológicos que restan de la posición prioritaria de los objetivos relacionados con la democracia social radical. La escasez de productos básicos a partir de 2007, lo que contribuyó a la primera derrota electoral de los chavistas en el referéndum celebrado en diciembre de ese año, llevó al Gobierno a prestar mayor atención al aumento de la producción, en lugar de los programas sociales. La indemnización por expropiaciones generalizadas, que fueron diseñadas para alcanzar los objetivos económicos, que incluyen la lucha contra la escasez y la especulación, representó una carga para los ingresos nacionales durante un periodo de disminución de los ingresos petroleros (Ellner, 2010:11). Los cortes presupuestarios de algunos programas sociales se hicieron sentir por primera vez en 2009, cuando Chávez mismo reconoció un deterioro del programa de Barrio Adentro. La reducción del gasto social también fue puesta en evidencia

en el primer semestre de 2010 cuando sólo 12.000 de los 30.000 consejos comunales de la nación renovaron su estatus jurídico como lo requería la ley de diciembre de 2009 para calificar para fondos de los futuros proyectos.<sup>14 15</sup>

Una modificación del discurso oficial acompañó este cambio de enfoque. Durante su tercera presidencia, Chávez se declaró «marxista» y por primera vez insistió en el papel de liderazgo revolucionario de la clase obrera. Como resultado, el discurso comenzó a centrarse más en los centros de producción, aunque no restaron importancia de la unidad territorial y, específicamente, la comunidad, a la cual están vinculados las cooperativas, los consejos comunales y los programas de las misiones. Los chavistas, por ejemplo, consideran cada vez más la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas estatales, y particularmente la industria pesada de la región de Guayana, de acuerdo con el «Plan Socialista de Guayana» puesto en marcha en 2009, como la encarnación de la democracia participativa. Aunque después de 2009 los objetivos y programas sociales y la incorporación de los anteriormente no representados continuaban desempeñando un papel fundamental en el discurso chavista y las asignaciones presupuestarias, ellos han comenzado a perder la primacía de años anteriores, cuando eran la piedra angular de la democracia social radical. Los programas sociales dirigidos principalmente a los sectores no incorporados de la población ahora reciben por parte del Gobierno el mismo grado de atención que las expropiaciones, las cuales subrayan el papel fundamental del sector obrero incorporado.

En definitiva, a lo largo de la presidencia de Chávez la participación en los movimientos y programas sociales y la actividad partidista ha impactado las vidas de un gran número de venezolanos desfavorecidos, pero los resultados han sido mixtos. El presente trabajo ha puesto de manifiesto los logros de los programas sociales chavistas en la forma de empoderamiento (una condición subjetiva), logros educativos, las experiencias de aprendizaje e inclusión, todos los cuales promueven los objetivos de la democracia social radical. Sólo si se toman en cuenta estos avances a gran escala puede explicarse los éxitos electorales sin precedentes de los chavistas durante un periodo tan prolongado. En el lado negativo, el alto índice de fracaso de las cooperativas y (aunque a menor grado) los consejos comunales, debido a la inexperiencia organizativa de sus miembros y las deficiencias institucionales del Estado, ha disminuido el entusiasmo de algunos partidarios chavistas, lo que a menudo conduce a la desilusión y la pasividad. El impacto de esta diversidad de experiencias sobre la población excluida y semiexcluida de Venezuela dará forma a la política de la nación y a las relaciones sociales por muchos años.

<sup>14</sup> Entrevista personal con Leandro Rodríguez, consejero de la Comisión de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional de la Asamblea Nacional, 29 de julio de 2010, Caracas.

<sup>15</sup> En abril de 2012, la ministra para las Comunas y Protección Social, Isis Ochoa, informó que había 41.600 consejos comunales registrados en el país y que más de 13.800 proyectos estaban actualmente en ejecución.



## Referencias bibliográficas

- Arconada, Santiago** (2009). «Es necesario replantear la relación entre socialismo y democracia», *Comuna: pensamiento crítico en la revolución*, julio-septiembre, Caracas.
- Arenas, Nelly y Luis Gómez Calcaño** (2006). *Populismo autoritario: Venezuela, 1999-2005*, Caracas, Cendes.
- Bilbao, Luis** (2008). *Venezuela en revolución: el nacimiento del socialismo*, Buenos Aires, Capital Intelectual.
- Blanco Muñoz, Agustín** (1998). *Habla el comandante*, Caracas.
- Brito, Manuel** (2009). «Bocabulario burgués (o sea, Ernesto, Vladimir, Mario Villegas)», [www.aporrea.org/ideologia/a92363.html](http://www.aporrea.org/ideologia/a92363.html) (27 de diciembre).
- Caballero, Manuel** (1986). *Latin America and the Comintern, 1919-1943*, Cambridge, Inglaterra, Cambridge University Press.
- Castañeda, Jorge G. y Marco A. Morales** (2008). «The Current State of the Utopia», en Castañeda y Morales, eds., *Leftovers: Tales of the Latin American Left*, Nueva York, Routledge.
- Coppedge, Michael** (1994). *Strong Parties and Lame Ducks: Presidential Partyarchy and Factionalism in Venezuela*, Stanford, California, Stanford University Press.
- D'Elia, Yolanda y Luis Francisco Cabezas** (2008). *Las misiones sociales en Venezuela*, Caracas.
- Denis, Roland** (2003). «Venezuela and the Popular Movement», *Z Magazine*, vol. 16, n° 10, octubre.
- Denis, Roland** (2006). «Venezuela: The Popular Movements and the Government», *International Socialist Review*, n° 110.
- Denis, Roland** (2009). «Hay una lucha histórica que no ha sido resuelta en veinte años», *Comuna: Pensamiento crítico en la revolución*, Caracas.
- Ellner, Steve** (2004). «Hugo Chávez y Alberto Fujimori: análisis comparativo de dos variantes de populismo», *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 10, n° 1, enero-abril, pp. 13-37.
- Ellner, Steve** (2009). «A New Model With Rough Edges: Venezuela's Community Councils», *NACLA: Report on the Americas*, vol. 42, n° 3, mayo-junio.
- Ellner, Steve** (2010). «Chávez Pushes the Limits: Radicalization and Discontent in Venezuela», *NACLA: Report on the Americas*, vol. 43, n° 4, julio-agosto.
- Ellner, Steve** (2011). *El fenómeno Chávez: sus orígenes y su impacto*, Caracas, Centro Nacional de Historia, Fondo Editorial Tropykos.
- Fernandes, Sujatha** (2010). *Who Can Stop the Drums? Urban Social Movements in Chávez's Venezuela*, Durham, North Carolina-Londres, Duke University Press.
- García-Guadilla, María Pilar** (2007a). «Ciudadanía y autonomía en las organizaciones sociales bolivarianas: los Comités de Tierra Urbana como movimientos sociales», *Cuadernos del Cendes*, n° 66.
- García-Guadilla, María Pilar** (2007b). «Social Movements in a Polarized Setting: Myths of Venezuelan Civil Society», en Steve Ellner y Miguel Tinker Salas, eds., *Venezuela: Hugo Chávez and the Decline of an «Exceptional Democracy»*, Lanham, Maryland, Rowman and Littlefield.
- García-Guadilla, María Pilar** (2008). «Poder popular y límites de la democracia participativa en Venezuela: la experiencia de los consejos comunales». Ponencia presentada en la Segunda Conferencia de la Sección Venezolana de LASA, mayo, Caracas.
- Germani, Gino** (1962). *Política y sociedad en una época de transición: de la sociedad tradicional a la sociedad de masas*, Buenos Aires, Paidós.

- Harnecker, Marta** (1999). *Haciendo posible lo imposible: la izquierda en el umbral del siglo XXI*, México-Madrid, Siglo Veintiuno.
- Harnecker, Marta** (2007). *Rebuilding the Left*, Nueva York, Zed Books.
- Harnecker, Marta**, entrevistadora (2008). *Transfiriendo poder a la gente: municipio Torres, estado Lara*, Caracas.
- Harnecker, Marta** (2009). «El Estado debe facilitar y no suplantar al poder popular», *Comuna: Pensamiento crítico en la revolución-Intelectuales, democracia y socialismo*, julio-septiembre, Caracas.
- Harnecker, Marta** (2010). «Latin America and Twenty-First Century Socialism: Inventing to Avoid Mistakes», *Monthly Review*, vol. 62, n° 3.
- Hawkins, Kirk A.** (2010). *Venezuela's Chavismo and Populism in Comparative Perspective*, Nueva York, Cambridge University Press.
- Hellinger, Daniel** (2007). «When 'No' Means 'Yes to Revolution': Electoral Politics in Bolivarian Venezuela», en Steve Ellner y Miguel Tinker Salas, eds., *Venezuela: Hugo Chávez and the Decline of an «Exceptional Democracy»*, Lanham, Maryland, Rowman and Littlefield.
- Hellinger, Daniel** (2009). «Virtual participation and political virtue: Chavistas on the Internet in Venezuela». Ponencia presentada en el congreso de la Latin American Studies Association, junio, Río de Janeiro.
- Hellinger, Daniel** (2011). «Defying the Iron Law of Oligarchy I: How Does 'El Pueblo' Conceive Democracy?», en David Smilde y Hellinger, eds., *Venezuela's Bolivarian Democracy: Participation, Politics, and Culture under Chávez*, Durham, North Carolina, Duke University Press.
- James, Daniel** (2000). *Doña María's Story: Life History, Memory, and Political Identity*, Durham, North Carolina, Duke University Press.
- Lanz Rodríguez, Carlos** (2006). *Aportes para el debate del socialismo del Siglo XXI*, Caracas.
- Lenin, V.I.** (1935). *Two Tactics of Social-Democracy in the Democratic Revolution*, Nueva York, International Publishers.
- López Maya, Margarita y Luis E. Lander** (2009). «El socialismo rentista de Venezuela ante la caída de los precios petroleros internacionales», *Cuadernos del Cendes*, n° 71, mayo-agosto.
- López Sánchez, Roberto** (2009). «Autonomía sindical y soberanía popular», en Margarita López Maya, ed., *Ideas para debatir el socialismo del siglo XXI*, tomo 2, Caracas, Editorial Alfa.
- Lovera, Alberto** (2008). «Los consejos comunales en Venezuela: ¿democracia participativa o delegativa?», *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 14, n° 1, abril.
- Lucena, Héctor**, coord. (2007). *Cooperativas, empresas, Estado y sindicatos. Una vinculación necesaria*, Barquisimeto, UCLA.
- Martínez, Carlos, Michael Fox y JoJo Farrell** (2009). *Venezuela Speaks! Voices from the Grassroots*, Oakland, California, PM Press.
- Monedero, Juan Carlos** (2009). «La reinención revolucionaria de Venezuela y los fantasmas del pasado», *Comuna: Pensamiento crítico en la revolución-Intelectuales, democracia y socialismo*, julio-septiembre, Caracas.
- Raby, D.L.** (2006). *Democracy and Revolution*, Londres, Pluto Press.
- Roberts, Kenneth M.** (2007). «Populism, Political Conflict, and Grass Roots Organization in Latin America», *Comparative Politics*, vol. 38, n° 2.
- Sanz, Rodolfo** (2007). *Hugo Chávez y el desafío socialista*, 2ª ed., Caracas, Editorial Nuevo Pensamiento Crítico.
- Silva, Eduardo** (2009). *Challenging Neoliberalism in Latin America*, Cambridge, Gran Bretaña, Cambridge University Press.

**Smilde, David** (2011). «Introduction: Participation, Politics, and Culture – Emerging Fragments of Venezuela’s Bolivarian Democracy», en David Smilde y Daniel Hellinger (eds.), *Venezuela’s Bolivarian Democracy: Participation, Politics, and Culture under Chávez*, Durham, North Carolina, Dule University Press.

**Sosa A., Arturo** (2007). «Reflexiones sobre el poder comunal», en Margarita López Maya, ed., *Ideas para debatir el socialismo del siglo XXI*, tomo I, Caracas, Editorial Alfa.

**Valderrama, Toby y Alejandro Mena** (2005). *Rumbo al socialismo*, Barcelona, Venezuela, Misión Ribas.

**Webber, Jeffrey R. y Susan Spronk** (2010). «Venezuela: Voices on the Struggle», *Against the Current*, n° 148.

**Weisbrot, Mark** (2011). «Venezuela in the Chávez Years: Its Economy and Influence on the Region», en Thomas Ponniah y Jonathan Eastwood, eds., *The Revolution in Venezuela: Social and Political Change under Chávez*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.

**Woods, Alan** (2008). *Reformismo o revolución: marxismo y socialismo del siglo XXI. Respuesta a Heinz Dieterich*, Madrid, Editorial Fundación Federico Engels.